El fuero civil y el fuero eclesial

Por: Allan Andy Marcelo Sánchez Añazgo¹

Recibido: 21-07-2014

Acceptado: 06-08-2014

Sumario:

1.- Introducción. 2.- El derecho civil y eclesial: convergencias históricas 3.- ¿Qué sucede para la justicia canónica? 4.- ¿Qué sucede para la justicia penal? 5.- Conclusiones.

Resumen:

La noticia en la prensa es tan vertiginosa como un vórtice inquisitivo. Es un torrente de rumores: que no proporcionan la verdad sobre los hechos. No tiene en cuenta la presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución. Es común en la sociedad peruana que la prensa puede determinar quién es inocente o culpable: todo el mundo puede ser severamente juzgado. No importa si eres una persona física, pero se vuelve peor si usted es un miembro de la Iglesia Católica. Incluso me atrevo a decir que esto sucede en el resto del mundo.

La ley civil y eclesiástica tiene un mismo origen: el derecho romano alemán. Sus características hablan por sí mismos. Por lo tanto, comparten una línea similar de pensamiento o principios de que uno de ellos dice que nadie es culpable antes de un juicio. Sin embargo, además del sistema actual es más preciso en la actualidad, debo señalar que sus normas no se aplican con rigor cuando declare la inocencia o la culpabilidad es de unos.

Abstract:

The news in the press are so vertiginous like a vortex inquiring. It is a torrent of murmurs: they do not provide the truth about facts. It ignores the presumption of innocence that is enshrined in our Constitution. It is common in the peruvian society that the press can determine who is innocent or guilty: everybody can be severely judged. It does not matter if you are just a natural person, but it becomes worse if you are a member of the Catholic Church. I even dare to say that this happens in the rest of the world.

The civil and ecclesiastical law have a same origin: the German Roman law. Their features talk by themselves. Therefore, they share a similar line of thought or principles, which one of them says that nobody is guilty before a judgement. However, besides the current system is

¹ Bachiller en derecho por la Universidad de San Martín de Porres, y licenciado por la misma casa superior de estudios.

more accurate nowadays, I must point out that their standards are not rigorously applied when to declare innocence or culpability is about.

Palabras claves

La ley civil y eclesiástica - los tribunales civiles y eclesiásticos - juicio legal - dictamen jurídico - recurso mediático – prensa - latae sententiae - ferendae sententiae.

Key Word

The civil and ecclesiastical law - civil and ecclesiastical courts - legal judgment - Legal Opinion - media resources - press - latae sententiae - ferendae sententiae.

1.- INTRODUCCIÓN

En estos últimos años está muy de moda colocar a los miembros de la iglesia Católica, sobre todo a los miembros que ejercen el oficio episcopal, sacerdotal y diaconal, en el ojo de la tormenta. Se ha instalado el tribunal de la *Laica Inquisición*², pero en el peor de los sentidos. Este *tribunal* está conformado por los movimientos “protodo” o “a favor de todo”: los movimientos a favor del aborto, de la defensa de vida de los animales por encima de la del ser humano, las exposiciones artísticas que afretan e insultan la creencia de muchos los que profesamos la religión católica (mostrando imágenes verdaderamente humillantes) y, por supuesto, los movimientos a favor de la pena de muerte. ¿Pena de muerte y aborto? Yo diría dicotomías primariosas.

El derecho civil y el derecho eclesial tienen particularidades que se remontan a los primeros códex, ya que devienen de una misma fuente jurídica: el derecho romano germánico; por lo tanto siguen una similar línea de pensamiento. Empero, debo precisar que esta corriente jurídica ha sido depurada hasta llegar a los actuales y vigentes códigos adjetivos. Permítanme citar el Código de Derecho Canónico como flor de ejemplo y así poder abundar en el tema que nos incumbe.

La verdad se cuenta completa. No puede una verdad ser contada por porciones o pedacillos, ya que esto, en puridad, es una flagrante mentira. La verdad es absoluta y completa. En virtud de ello, el presente artículo demuestra el encono contra la iglesia Católica, la falta de tolerancia (casi todos los “tolerantes” se jactan de tener un amigo con tendencias liberales como “señal” de cultura) y donde en palabras del Excelentísimo y Eminentísimo Monseñor

² Manifiesto que “Laica inquisición” figura en el peor sentido, dado cuenta que la “Santa Inquisición” era en realidad un tribunal de averiguación procesal, que utilizaba métodos propios de la época para sus interrogatorios, empero en virtud de que la palabra “inquisición” se utiliza de una forma peyorativa, o con una acepción en la cual deja entrever que este un juicio y proceso vicioso, cito esa expresión en tal sentido.

Juan Luis Cardenal Cipriani Thorne, que retumban como campanas en las orejas de los periodistas faranduleros: “*han hecho leña del árbol caído*”.

Las noticias sobre diversos casos han circulado por la prensa de forma vertiginosa, como una vorágine o tromba inquisidora, tratando de hacer leña y hoguera del árbol, que aún no ha sido talado, como producto de murmullos blandengues que por lo general no otorgan la verdad sobre hechos fácticos. Se sentencia al que no ha sido juzgado a través de un titular en primera plana. Se superpone y deja de lado **la presunción de inocencia**, consagrada en nuestra Carta Magna. “Si te abofetea la prensa con encono, pues condenado estás”, y lo pongo en encomillado, porque hasta parece ser principio constitucional, ya que la casuística ha demostrado que la sociedad peruana, y me atrevo a decir mundial, funciona así y no solo con el clero (aunque con mayor avidez y fruición), sino también con los laicos, o miembros de esta República. Solo bastaría con retroceder un poco en el tiempo y darnos cuenta como se lapidó a la señora Rosario Ponce López en el caso del joven **Ciro Castillo Rojo**. Lógicamente no abundaré sobre el particular, porque entiendo que el lector conoce en demasía el caso mediático que terminó archivado luego de declarar a la señora **inocente**. Y eso es verdad judicial penal a la que nadie puede oponerse.

2.- EL DERECHO Y CIVIL Y ECLESIAL: CONVERGENCIAS HISTÓRICAS

Según el Código de Derecho Canónico vigente, en el Canon N°1395, dentro de uno de los diversos artículos penales que se encuentran en él, y que sancionan el actuar típicamente antijurídico culpable de un clérigo que no acata la normativa la Santa Madre Iglesia Católica, toma partida para aplicar sanciones severas. Tomaremos como ejemplo “*el pecado contra sextum*”:

1395 § 1. El clérigo concubinario, exceptuado el caso del que se trata en el [c. 1394](#), y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical.

§ 2. El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera.

Por cuanto el clérigo que se encuentra bajo esta tipología penal canónica será sancionado por la Santa Madre Iglesia Católica, de acuerdo a derecho, y como consecuencia de lo

estipulado en el Código de Derecho Canónico promulgado en el año 1983, obtendrá la pena que puede imponer la Iglesia, además de la excomunión, sin dejar de lado que se aúne a ella la reducción al estado laical, para los que han recibido alguna orden. Esta sanción puede otorgarse *latae sententiae* y *ferendae sententiae*³, según lo que tenemos a la vista. Por lo tanto, considero relevante revisar lo que menciona el doctor José Bernal, de la Universidad de Navarra en su artículo “Regulación de los delitos contra el sexto mandamiento” el c. 1395, para poder entender el proceder del fuero canónico en estos casos:

“...d) Otros delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo (§ 2)

El canon 1395 § 2 se refiere al "clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad".

El texto legal parece contener implícita la consideración como delictiva de cualquier violación externa del sexto mandamiento del Decálogo, aunque a efectos de punibilidad sólo sean relevantes las que reúnan las características enumeradas. En efecto, en el § 1 del canon es explícita la identificación entre delito y pecado. Se hace referencia al "clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo"; y más adelante se añade como agravante: "**si persiste el delito**". En la redacción del § 2 " se nota una cierta tensión: por una parte se califican como delito todas las violaciones externas del sexto mandamiento; por otra, se precisa que se debe tratar de violaciones con determinadas características".

³ **Wikipedia, enciclopedia libre:** http://es.wikipedia.org/wiki/Latae_sententiae: *Latae sententiae* es un término latino utilizado en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, que literalmente quiere decir "dado pena". Oficialmente, una pena de *latae sententiae* sigue automáticamente, por fuerza de ley en sí misma, cuando una ley es contravenida, sin necesidad de declaración por una autoridad eclesiástica. Un ejemplo de este tipo de excomunión se da para quien procure un aborto, si es que éste se produce. Una pena de *latae sententiae* puede ser una de excomunión, interdicto o suspensión. La excomunión prohíbe el ejercicio de ciertos derechos bautismales, y puede implicar restricciones en cuanto a la participación en los acontecimientos litúrgicos y el gobierno de la iglesia, y la recepción de beneficios de la iglesia. Un interdicto implica las mismas restricciones litúrgicas que la excomunión, pero no afecta a la participación en el gobierno de la iglesia. La suspensión, que sólo afecta a miembros del clero, prohíbe todos o algunos de los actos de potestad de orden, de régimen y el ejercicio de todos o algunos derechos o funciones inherentes a un oficio. Mientras que la excomunión no necesita una amonestación previa, las otras dos sí. El interdicto implica una prohibición de ejercer, aunque no de recibir. Además, *latae sententiae* implica una aplicación automática de la pena canónica, mientras que "*ferendae sententiae*" implica una aplicación de la pena canónica a través de un proceso.

Para Nigro (Comentario al c. 1395, *Commento al codice di Diritto canonico*, Roma 1985, p. 819), la materia del delito es la que cae dentro del sexto mandamiento del Decálogo, que abarca todos los actos graves consumados de lujuria, ya sean *iuxta* o *contra naturam*. El determinar qué comportamientos puedan suponer, objetivamente hablando, una violación del sexto mandamiento del Decálogo, puede no resultar fácil en algunos casos, especialmente si se hace una interpretación tan extensa como propugnan la mayoría de los autores. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la "Tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido al conjunto de la sexualidad humana" (n. 2336). El tratamiento penal de la cuestión probablemente reclame más matices, pues en un ámbito de límites tan amplios cualquier violación externa de la castidad podría tener la consideración de delito. En algunos periodos históricos, dentro del campo de la teología moral, la apelación al sexto mandamiento del Decálogo se refería de modo directo y explícito al adulterio y de modo indirecto o implícito a **cualquier ofensa contra la castidad**⁴, y así lo expusieron algunos manualistas clásicos. Esto podría dar pie a una interpretación más estricta, quizá más acorde con la naturaleza del derecho penal. En cualquier caso, la expresión "delito contra el sexto mandamiento del Decálogo" resulta confusa y de difícil interpretación (y aplicación) en más de una situación.

Puede que la cuestión carezca de interés práctico desde el punto de vista de la punibilidad; pero sí tiene, pienso, trascendencia teórica, y en ese sentido es heredera de concepciones arraigadas en el anterior cuerpo legal. Ese tipo de delitos podría ser castigado, bajo el c. 1399, como infracción de una ley canónica y no sólo divina, siempre que la conducta de que se trate sea grave y urja la necesidad de prevenir o reparar el escándalo. No parece, desde luego, que el §2 del c. 1395 prevea castigar cualquier otro delito contra el sexto mandamiento que no reúna alguna de las circunstancias de violencia, amenazas, publicidad o cómplice o víctima menor de 16 años. El código no castiga explícitamente la relación esporádica que pudiera tener un clérigo con un adulto consintiente, o un acto aislado de homosexualidad.

En cualquier caso, los delitos especificados en el canon son acciones concretas y no comportamientos habituales o permanentes; acciones que son consideradas de una gravedad especial, tanto por el derecho canónico como por la sociedad actual.⁵

La condición de que el delito se haya cometido "públicamente" no parece referirse a que el hecho se haya divulgado o a que por las circunstancias en las que se realizó se estime que se divulgará fácilmente (cfr. c. 2197 § 1 CIC 17), sino al delito cometido en lugar público o abierto al público, aunque sólo lo vean unos pocos y, de hecho, no se

4 Énfasis nuestro

5 Énfasis nuestro

divulgue...”

Por lo tanto con expuesto *ut supra* ya podemos hacer un paralelismo entre la justicia adjetiva canónica y civil

3.- ¿QUÉ SUCEDE PARA LA JUSTICIA CANÓNICA?

1.- “*La respectiva motivación de los decretos*”: cuando se ha iniciado un proceso penal dentro del fuero civil o canónico, *prima facie*, debe existir notificación y esta deberá ser debidamente sustentada bajo apercibimiento de declararse nula.

Sobre el tema es importante indicar que es principio fundamental, como lo hemos mencionado, que, en el derecho, toda resolución por principio general debe ser fundamentada, salvo las de mero trámite (entendamos que existen los decretos, autos y sentencias)

De no serlo, devienen en nulas o anulables; por lo tanto, pueden interponerse (para salvaguardar el debido proceso) los recursos impugnatorios, el de nulidad o el de aclaración e integración.

2.- “*Aplicación de sanciones desproporcionadas, ya que se desconoce de los delitos que se le acusa, su procedencia, los denunciadores y su jurisdicción, además de la época en la cual se cometieron los supuestos delitos*”: en virtud de ello, se desprende que en la sanción a aplicarse existirá una debida individualización de o de los sujetos activos del hecho delictuoso, y que el supuesto actor, conozca el “*iter criminis*” y razonamiento utilizado por el juzgador (subsumamos fiscal) del cual es sujeto pasivo de las acusaciones, siendo estos elementos la médula y basamento de cualquier proceso de investigación criminal y por cuanto de unívoca relación con la interposición de la pena.

A mayor abundamiento, se precisa que el derecho que le ampara al juzgamiento debido a favor del acusado y de no ser invocado correctamente, el juzgador tiene la obligación de aplicarlo correctamente (*iura novit curia*, es decir, en palabras del reverendo padre Luis Cordero Rodríguez [ex decano de la Facultad de Derecho de la universidad de Lima]: “los Obispos y los de su curia no necesitan mayor auxilio práctico en lo que canónicamente se refieren- cuestión similar a un juez civil”). Lo que sin tecnicismos equivaldría a que el juez deberá aplicar el derecho pertinente en cada caso. Es por ello, que si el juzgador detectara algún vicio procesal es obligado a retrotraer al estado anterior procesal donde ocurrió el hecho vicioso.

Dado cuenta lo explicado brevemente; **para que exista sentencia debe haber un juicio jurídico y legal, no mediático** y, como es lógico antes de ello, un proceso **dentro de**

ambos fueros. De este modo, no quepa la menor duda que la sentencia otorgada ha sido efectuada salvaguardando todos los principios garantistas del acusado.

También es importante conocer que sobre este respecto un breve esbozo sobre las medidas cautelares que *pueden ejecutarse extra proceso* quiere decir que se le puede notificar de la medida sin que este haya sido sometido a un proceso canónico, fundándose en un interés superior, en este caso **la salud pastoral de su diócesis y del supuesto agraviado.**

Entonces al juzgador de la causa le bastaría, para imponer una medida cautelar, tomar conocimiento de algún supuesto delito, ya sea *contra sextum* u otros tipificados en el códex, además de tener visos e indicios suficientes para que resuelva cautelarmente la suspensión de sus derechos para posteriormente empezar con la instrucción civil o juicio canónico según sea el caso y el fuero en el que se esté juzgando, ya sea de forma paralela o concatenada (sin menguar la capacidad del acusado de interponer los medios impugnatorios suficientes para poder levantar la medida bajo el cual está siendo sometido).

Entonces de forma preliminar, tendríamos que entender que las medidas cautelares pueden solicitarse y ser declaradas fundadas extra proceso, dada su naturaleza preventiva y de emergencia. Imaginemos una medida anticipada de alimentos, en la cual se determina que el padre del menor preventivamente asigne un monto dinerario antes que empiece el proceso en sí, ya que el hijo no puede quedarse sin alimentos hasta que empiece el juicio o se dicte sentencia. Lo mismo supondría un sujeto pasivo de un acto penal en su contra para salvaguardar su integridad.

4.- ¿QUÉ SUCEDE PARA LA JUSTICIA CIVIL (PENAL)?

Por otro lado, el fuero civil actúa de forma similar. Si nos circunscribimos a la ley penal, un ciudadano residente en el Perú tendrá que ser notificado de la denuncia de la parte acusadora y así se corra traslado del contenido del delito y que el acusado rinda su manifestación, contestación o descargos pertinentes. Posteriormente, el fiscal emitirá un dictamen, el cual puede resolver en tres aristas: la primera, el archivamiento (si es que no hay indicios de delito); la segunda, solicitar una mayor investigación; y la tercera, elevar los actuados (y habiendo visos de delito) al juez que resolverá con el auto de instrucción. Lógicamente que el acusado tendrá, en cualquiera de las decisiones fiscales, la opción de presentar **recurso impugnatorio de queja** ante el fiscal superior, la cual podrá declararla infundada prosiguiendo la investigación o fundada dejando sin efecto la medida.

Por otro lado, y no menos importante para la justicia civil, es medular que se realice una investigación por parte de su fuero. En este punto conviene advertir que muchas veces las **leyes civiles no realizan las actividades pertinentes.** Acá radica la substancia del presente

artículo: **¿por qué las autoridades civiles no realizan las actividades procesales suficientes y condenan a los causantes de delitos o deciden abrir investigación preliminar de oficio?**, en vez de inculpar a la iglesia Católica de encubrimientos, cuando la justicia civil tiene la potestad de actuar en el mismo momento de conocido el caso.

La Santa Madre Iglesia Católica tiene sanciones que se limitan, digamos a un fuero íntimo y exterior, a la revocación de las investiduras a los ordenados. **Empero, el fuero civil** es el que puede y tiene la capacidad de ejercer a través del *ius puniendi* toda su fuerza sancionadora y condenar a prisión a los fehacientemente comprobados delincuentes. Es por ello, que la crítica no es a la Norma Canónica, ya que esta, sea en su sentido *latae sententiae* o *ferendae sententiae*, sanciona al sacerdote *ipso facto*, sino al sistema penal que no toma el caso de oficio y aplica la pena de acuerdo a derecho. Siempre se inculpa a la Iglesia de no sancionar a los sacerdotes. ¡Mentira! La que no ejerce sus facultades (obviamente no en todos los casos) es el sistema civil, porque no condena por los delitos cometidos a los sacerdotes o comunes civiles con la aplicación de la ley penal.

Por ejemplo, en un caso en contraposición con el anterior, de suma eficacia procesal y en el cual la coerción ha cumplido al máximo su naturaleza, es en el que un miembro del clero mantiene relaciones sexuales con una mujer y producto de estas tienen un hijo que no es reconocido por el padre⁶, sino hasta que la mujer interpone una demanda de filiación que, según la ley civil vigente, se le reputará como padre biológico si no cumple con realizarse la prueba de ácido desoxido ribonucleico (ADN) en un periodo de 10 (diez días), declarándose la filiación de paternidad y su anotación en los registros de personas correspondiente.

El clérigo ha sido a todas luces sancionado por la ley civil y ha tenido que reconocer al menor y como consecuencia de ello deberá hacerse cargo de los alimentos en la parte proporcional según lo establezca un acta conciliatoria o un juez. En este caso, la ley canónica tendrá también que hacer lo propio y someterlo a un proceso, en el cual, de acuerdo a las pruebas aportadas, se le reduce al estado laical por contravenir los cánones señalados en el caso anterior.

5.- CONCLUSIONES:

A.- Existen dos fueros (eclesial y civil) para sancionar a un clérigo (y con esto incluyo a los diocesanos y religiosos). Acorde al tipo de falta o delito cometido, deben realizarse las respectivas diligencias indagatorias previas, ya que es posible que en algunos casos sea solo una falta de carácter eclesial y no tipifique un delito. Pero en el 100% de los casos, no arbitrarios, todo delito penal positivizados en el *corpus* normativo de la ley penal, también lo está en el Código de Derecho Canónico.

⁶ La madre tiene el derecho de poner el apellido del supuesto padre, sin que esto genere la filiación, pero en una obvia desprotección jurídica al varón. Ley N°2870 que modifica el artículo N°21 del código Civil Peruano.

B.- No se puede afirmar bajo ninguna forma que la Iglesia incumpla con su rol sancionador, ya que desde que el clérigo ha cometido un delito se encuentra sancionado *latae sententiae*.

C.- Lo que sí se puede resaltar es el rol del Estado, al no perseguir los casos en los cuales los clérigos cometen delitos y no actuar ya sea de oficio o de parte, aplicando todos los mecanismos punitivos legales, sustantivos y adjetivos, para que no exista duda sobre la capacidad del Estado y su facultad *ius puniendi*.

D.- La prensa, en un intento de demostrar que la Santa Iglesia Católica solamente está conformada por sacerdotes o laicos delincuentes “encubiertos por sus Obispos” (que puede que hayan errado en su actividad pastoral y ciudadana), pretende solapadamente la secularización de esta institución. Titulariza y mediatiza, con un énfasis superlativo, cualquier supuesto delito que pueda cometer algún civil vinculado de alguna forma con el catolicismo.